



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, cuatro (4) de agosto de dos mil veinte (2020)

REFERENCIA: SENTENCIA
PROCESO: ORDINARIO LABORAL PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE: RAUL ANTONIO VILLA CARDONA

DEMANDADO: COLPENSIONES
RADICADO: 050001 – 31 – 05 – 005-2018- 0215
ACTA N°: 44

En la fecha indicada, la Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, se constituyó en audiencia pública en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por **RAUL ANTONIO VILLA CARDONA** en contra de **COLPENSIONES** para pronunciarse en virtud del grado jurisdiccional de CONSULTA respecto a la sentencia con la cual el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 44** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. LA DEMANDA

El demandante pretende con este proceso básicamente que se CONDENE al reconocimiento de una **PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ – MINERÍA EN SOCAVÓN**, intereses moratorios y costas.

Para fundamentar su pretensión señaló básicamente: i) Nació el 16 de abril de 1965 y durante más de 30 años trabajó en actividades de alto riesgo – minero en socavón con las empresas CARBONIA LTDA., CARBONIA LTDA MINA LA PANIAGUA, INDUSTRIAL HULLERA S.A., CARBONES SAN FERNANDO y CI CARMINALES S.A. Para la fecha de presentación de la demanda tenía 52 años de edad. ii) Fue afiliado al ISS desde el 7 de julio de 1983 hasta septiembre de 2016 y solicitó la pensión de vejez por alto riesgo el 21

de abril de 2016 porque cumple con requisitos del Decreto 2090 de 2003. Para esa fecha tenía 1602 semanas cotizadas a COLPENSIONES en alto riesgo. iii) COLPENSIONES negó mediante Resolución GNR 334589 del 11 de noviembre de 2016, Interpuso recursos de reposición y apelación, pero COLPENSIONES mantuvo su decisión. iv) Señala que tiene más de 700 semanas en alto riesgo y 1602 totales – 302 semanas adicionales que le permiten adquirir la pensión a los 50 años.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, y propuso como excepciones las que denominó INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION, IMPROCEDENCIA DE INTERESES MORATORIOS, IMPROCEDENCIA DE INTERESES INDEXACION, IMPROCEDENCIA DE CONDENA EN COSTAS, BUENA FE, PRESCRIPCIÓN Y COMPENSACIÓN

3. SENTENCIA

El juez de instancia en providencia del **23 de enero de 2019 CONDENÓ** a la **PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ DE ALTO RIESGO** desde el **1 de octubre de 2016**– fecha de desafiliación– hasta el **31 de enero de 2018** con un retroactivo por valor de **\$29.833.876**. Y a partir del **1 de febrero de 2019**, seguir pagando una mesada por valor de **\$1.02.607**. Autoriza descuentos en salud

Para tomar esta determinación argumentó básicamente lo siguiente: i) Invocó el Decreto 2090 de 2003 y señaló que la mora en general y además en los puntos adicionales por alto riesgo no es oponible al afiliado, citando sentencias de la Corte Constitucional y la Sala Laboral de la CSJ. ii) Valorada la prueba en su conjunto concluyó que RAÚL ANTONIO nació el 16 de abril de 1965, realizó ctividades de alto riesgo como minero con diferentes empleadores (CARBONIA S.A. entre julio de 1983 hasta el enero de 1989; INDUSTRIAL HULLERA entre el 19 de septiembre de 1989 y el 1 de julio de 1998; CARBONES SAN FERNANDO entre el 25 de octubre de 2001 y el 29 de enero de 2005 y CI CARMINALES entre el 1 de febrero de 2005 y el 30 de septiembre de 2016) para un total de 10.373 días en alto riesgo que representa 1.481 semanas. iii) Que cotizó más de 1.600 semanas cotizadas de las cuales 1.190 fueron en alto riesgo, pero concluyó que el disfrute de la prestación debe ser desde el 1 de octubre de 2016 porque la última cotización al Sistema de Pensiones fue en septiembre de 2016, configurándose un retiro tácito del Sistema. iv) Para liquidar el valor aplicó el artículo 21 L100/93, concretamente el promedio de los últimos 10 años por ser más favorable (\$1.221.035) y aplicó la tasa consagrada en el artículo 10 Ley 797, concretamente el 73,72%, obteniendo una mesada de \$900.147 para el 2016, condenando con una mesada adicional al.

También **CONDENÓ** a intereses moratorios a partir del **22 de agosto de 2016** y hasta el pago efectivo de la obligación, así como a las **COSTAS** de la primera instancia.

4. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia¹, y **COLPENSIONES** intervino planteando básicamente, que se haga una revisión en relación con las CONDENAS a INTERESES MORATORIOS y COSTAS, invocando el artículo 141 de la Ley 100, la buena fe de la entidad y la ausencia de incumplimiento.

Pues bien, la competencia de la Sala está dada por el **GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA** a favor de COLPENSIONES. Atendiendo a la posición adoptada por las partes, la Sala analizará lo siguiente: i) Se abordarán los requisitos para acceder a la pensión especial de vejez por alto riesgo a la luz de la normativa y jurisprudencia sobre la materia. Luego se descenderá al caso concreto para verificar si la CONDENAS a esta prestación está ajustada a derecho. En este punto se determinará si el demandante probó haber ejecutado labores de alto riesgo de conformidad con la normativa vigente. ii) Igualmente, se constatará la procedencia de los intereses moratorios del art. 141 de la L. 100/93. iii) Se dispondrá sobre costas.

5. LA CONDENAS A LA PENSION ESPECIAL DE VEJEZ POR ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO

En todas las regulaciones sobre Pensión Especial de Vejez POR ACTIVIDADES PELIGROSAS en nuestro ordenamiento jurídico, la intención del legislador ha sido la de disminuir la edad **para esta categoría de trabajadores**, cuya salud se encuentra comprometida o tienen un desgaste orgánico prematuro al desempeñar actividades de alto riesgo expresamente contempladas por él, en consideración a las particulares características de los oficios que realizan y de las condiciones en que lo hacen, por su peligrosidad y prolongada exposición. Por ésta razón se ha establecido una **mayor cotización** a cargo de los empleadores.

Los tres últimos regímenes en materia de PENSIONES ESPECIALES DE VEJEZ POR ACTIVIDADES PELIGROSAS son: i) El del **Decreto 758 de 1990**, vigente desde 18 de abril de 1990 hasta el 22 de junio de 1994; ii) **Decreto 1281 de 1994**, vigente desde el 23 de junio de 1994 hasta el 27 de julio de 2003; y iii) **Decreto 2090 de 2003**, desde 28 de julio de 2003 en adelante. Quien pretenda beneficiarse directamente de los requisitos de

¹ Artículo 15 Decreto 806 de 2020

cada una de esas normatividades debe cumplir los requisitos mínimos de edad y semanas **dentro la respectiva vigencia**, sin perjuicio del derecho que le asiste a que en su caso **se aplique el régimen anterior correspondiente**, siempre y cuando cumpla con las exigencias consagradas en las normas que regula cada régimen de transición.

5.1. ANALISIS SOBRE EL RÉGIMEN ESPECIAL A APLICAR EN ESTE CASO

De acuerdo con lo detallado en los **ANTECEDENTES** de esta providencia, se sabe que el Juez CONDENÓ al pago de la pensión especial de vejez aplicando el **Decreto 2090 de 2003**, considerando que estaba acreditado que el actor ejecutó labores de alto riesgo –MINERÍA EN SOCAVÓN- con los empleadores CARBONIA S.A., INDUSTRIAL HULLERA S.A., CARBONES SAN FERNANDO S.A. y CI CARMINALES S.A. Aseveró que para **abril de 2016** cuando el actor solicitó la prestación ya el derecho a la PEV estaba causado pero condenó al retroactivo pensional a partir del **1 de octubre de 2016**, pues el DEMANDANTE continuó cotizando al Sistema.

Esta Sala de Decisión comparte los planteamientos del Juez de instancia, por lo siguiente. En primer lugar, el señor VILLA CARDONA sí acreditó haber ejecutado actividades de alto riesgo, concretamente en minería de socavón, de conformidad con el **numeral 1 del art. 2 del Decreto 2090 de 2003**. En efecto, las historias laborales allegadas al plenario y que se analizarán con detalle más adelante, muestran que el DEMANDANTE prestó sus servicios a favor de varios empleadores, así: CARBONIA S.A., CIUDAD DON BOSCO (**NO FUE DE ALTO RIESGO**), INDUSTRIAL HULLERA S.A., CARBONES SAN FERNANDO S.A. y CI CARMINALES S.A.². Se abordará la prueba traída al proceso respecto de cada empleador.

5.1.1. Con el **EMPLEADOR CARBONIA S.A.** se probó la ejecución de actividades de alto riesgo entre el **7 de julio de 1983** y el **20 de septiembre de 1989**.

A esta conclusión se llega con el **certificado laboral** del empleador³, con el documento aportado por COLPENSIONES con la CONTESTACION, que se valora como uno de carácter **declarativo** proveniente de un **tercero** de conformidad con el **art. 262 de CGP**, pues se trata de una manifestación de ALBA LUZ MARÍN HERNÁNDEZ, actuando en nombre propio, como alguien que presencié que el demandante trabajó entre **julio de 1983** y el **20 de enero de 1989**, realizando oficios varios dentro de la mina como COCHERO, catalogados como de **ALTO RIESGO**⁴. Además, se observa que CARBONIA S.A. efectuó cotizaciones al entonces ISS en períodos **interrumpidos** entre el **7 de julio de 1983** y el **20 de septiembre de 1989**⁵

² (Fls. 45-57; 79-93)

³ Folio 136

⁴ Folio 111

⁵ Fls. 45-57; 79-93

5.1.2. Con el empleador **INDUSTRIAL HULLERA S.A.** Se probó la ejecución de actividades de alto riesgo entre el **19 de septiembre de 1989** y el **1 de junio de 1998**. Se llega a esta conclusión con el certificado laboral del ex liquidador de la empresa que fue liquidada de conformidad con el certificado especial de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN⁶. Además, en las historias laborales de COLPENSIONES y el documento en el que se identificaron los períodos con cotizaciones de alto riesgo se advierte que ese empleador realizó cotizaciones en alto riesgo⁷.

Y COLPENSIONES aportó un documento suscrito por el señor ALBERTO DE JESÚS BETANCUR en el que aseveró que el demandante trabajó con él en INDUSTRIAL HULLERA entre el **19 de septiembre de 1989** y hasta el **30 de septiembre de 1999**, quien **compareció como testigo**⁸.

En efecto, respecto a este vínculo declararon en el proceso dos compañeros de trabajo, que informaron sobre la actividad del actor en la mina, como **PALERO dentro del tajo**. **ALBERTO DE JESÚS BETANCUR** trabajó en INDUSTRIAL HULLERA desde el 11 de enero de 1982 y dice que el DEMANDANTE comenzó a trabajar en esa actividad como **en el 88 u 89** en la mina ubicada en AMAGÁ, vereda LAS MINAS. Y **FERNANDO ALONSO HOLGUÍN GALLEGO narra haber sido** compañero de trabajo de RAÚL ANTONIO en INDUSTRIAL HULLERA S.A. entre el **26 de febrero de 1994 y 1998**, relatando la actividad que realizaba, como minero de socavón

5.1.3. Con **CARBONES SAN FERNANDO** se probó la ejecución de actividades de alto riesgo entre el **25 de octubre de 2001** y el **29 de enero de 2005**.

A esta conclusión se llega con las certificaciones del empleador⁹, con documento que se obtiene del Expediente administrativo en el que se contabilizan las semanas cotizadas en alto riesgo, donde se reflejan la mayoría de ciclos comprendidos en dicho lapso¹⁰. Además COLPENSIONES reconoció la prestación del servicio en actividad de Alto Riesgo con este empleador, en los siguientes actos administrativos: **Resolución GNR 334589 del 11 de noviembre de 2016 Resolución SUB 85897 del 1 de junio de 2017 y Resolución DIR 9125 del 27 de junio de 2017**¹¹.

5.1.4. Y con **CARBONES CI CARMINALES S.A.** se probó la ejecución de actividades de alto riesgo entre el **1 de febrero de 2005** y el **30 de septiembre de 2016**. Esta conclusión

⁶ Folio 151, 152 y 157

⁷ Fls. 171

⁸ Fls. 110

⁹ Fls. 15, 112, 131

¹⁰ Folio 171

¹¹ Fls. 23-26, Fls. 30-35 y Fls. 36-44

se obtiene de los Certificados del empleador¹² , del documento del expediente administrativo en el que se contabilizan las semanas cotizadas en alto riesgo donde se reflejan la mayoría de ciclos comprendidos en dicho lapso¹³, así como de la declaración del testigo **ALBERTO DE JESÚS BETANCUR**, que fue compañero de trabajo del actor entre el **2004** y el **2013** en esta empresa, donde el actor “trabajaba haciendo avances, abriendo niveles dentro del SOCAVÓN”

Adicional a lo anterior, al igual que con CARBONES SAN FERNANDO, COLPENSIONES reconoció la prestación del servicio en actividad de Alto Riesgo con este empleador, en la **Resolución GNR 334589 del 11 de noviembre de 2016 Resolución SUB 85897 del 1 de junio de 2017 y Resolución DIR 9125 del 27 de junio de 2017**¹⁴.

5.1.5. LAS INCONSISTENCIAS DE LA HISTORIA LABORAL

Ahora bien, al encontrarse probados los extremos laborales así como la actividad de alto riesgo ejecutada por el actor, al analizar la historia laboral, se advierte claramente que hay varias inconsistencias que de ninguna manera pueden ser imputables al demandante, veamos¹⁵:

EMPLEADOR	DESDE	HASTA	SEMANAS DE LA HISTORIA	SEMANAS DE LA SALA
CARBONIA LTDA. (A)	07/07/1983	20/09/1989	278	337,86
INDUSTRIAL HULLERA S.A. (B)	19/09/1989	31/05/1998	422	451,43
CIUDAD DON BOSCO (C)	25/09/1998	15/02/1998	122,86	121,71
CARBONES SAN FERNANDO S.A.	25/10/2001	31/01/2005	168	168
CI CARMINALES S.A.	01/02/2005	30/09/2016	600	600
TOTAL SEMANAS COTIZADAS			1.603,14	1.680

A PESAR DE QUE LAS HISTORIAS SOLO REFLEJAN 1603,14 SEMANAS, SE CONCLUYE POR LA SALA QUE EN REALIDAD SON 1.680, POR LO SIGUIENTE:

- En el período detallado con el literal **(A) del cuadro anterior**, la sala incluye como **cotizados** los ciclos del **15 de abril de 1986 al 08 de mayo de 1986, 12 de agosto de 1986 al 19 de agosto de 1986; y 07 de julio de 1988 al 19 de enero de 1989**, que no aparecen en la historia laboral, pero se ha probado que la relación laboral con **CARBONIA LTDA.** estuvo vigente durante ese lapso.
- En el período correspondiente al literal **(B) del cuadro** el demandante trabajó para **INDUSTRIAL HULLERA S.A.**, evidenciándose que los siguientes ciclos se encuentran en **MORA: En enero y febrero de 1995, julio a septiembre de 1997,**

¹² Fls. 13-14; 99-103)
¹³ Fls. 171)
¹⁴ Fls. 23-26, Fls. 30-35 y Fls. 36-44
¹⁵ Historia Laboral del 20 de septiembre de 2017 (Fl. 45-57) Historia laboral del 18 de abril de 2018 (Fls. 79-92)

noviembre de 1997; enero y febrero de 1998 se reflejan menos de 30 días en cada uno. Se tendrá cada uno de 30, al haberse probado la prestación personal del servicio y no acreditarse ninguna novedad en ellos.

- Y en el descrito con el literal **(C)**, el actor trabajó para **CIUDAD DON BOSCO** y los períodos **septiembre de 1999** y **enero del 2000** se encuentran en **MORA** por lo que se reflejan los períodos por menos de 30 días. Se tendrán cada uno de 30, al haberse probado la prestación personal del servicio y no acreditarse ninguna novedad en ellos.

La Sala incluye estos períodos, porque el afiliado no puede soportar la carga de un empleador incumplido y moroso, y de una entidad renuente y pasiva en el cobro de las cotizaciones. Se comparte y acata el criterio jurisprudencial desarrollado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y por la Corte Constitucional, en el sentido de que si bien en materia de cotizaciones se presenta una relación triangular (empleador- trabajador – sistema) las obligaciones de cada uno de ellos difieren: **Al trabajador le basta con probar la prestación personal del servicio**, el empleador debe descontar el aporte del salario y pagar la cotización y la entidad del sistema, debe adelantar gestiones y trámites dirigidos al recaudo (**Radicado 34270** de 2008, **Radicado 38756** de 2012 , **Radicado 44190** de 2012 y **Radicado 48.381** de 2015).

El análisis de esta prueba en su conjunto, orienta a la Sala a concluir que el demandante cotizó un total de **1.680 semanas y 1.557 s SEMANAS DE ALTO RIESGO**, teniendo en cuenta hasta la última semana cotizada, en los términos definidos por el *A quo*.

5.1.6. LA CONCLUSION SOBRE EL RÉGIMEN ESPECIAL APLICABLE

El Juez concluyó que era aplicable el régimen consagrado en el **Decreto 2090 de 2003 (artículo 3 – 4)** para la pensión especial de vejez , lo que la Sala encuentra acertado, por lo siguiente: El actor nació el **16 de abril de 1965** y solicitó la pensión especial de vejez el **21 de abril de 2016**¹⁶ y para esa fecha: Tenía **más de 700 semanas** en actividades de alto riesgo, porque tal como ha quedado visto, trabajó en minería en socavón **1.534,57 semanas** y contaba con **1.661,72 semanas** para esa anualidad, y la **Ley 797 de 2003** exigía mínimo **1.300**.

En relación con el requisito de **edad**, el literal **a)** del **art. 4 del Decreto 2090 de 2003** exige al afiliado haber cumplido **55 años de edad**, siendo posible **reducirla** en un (1) año por cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años. Pues bien, a la fecha de la solicitud – **21 de abril de 2016**- cuando ya contaba con

¹⁶ (Fl. 23)

51 años de edad, el actor tenía un total de **1661,71 semanas cotizadas** de las cuales **1534,57 eran en alto riesgo**, por lo que tendría derecho a reducir la edad 1 año, para pensionarse a los **50**, es decir, el **16 de abril de 2015**.

5.2. En relación con el **DISFRUTE** de la prestación, se observa que el Juez de instancia condenó desde el **1 de octubre de 2016**, por haber efectuado la última cotización hasta el día anterior, aspecto que resulta acorde con lo previsto en los artículos **13 y 35 del D. 758 de 1990** y el precedente de la Sala Laboral en relación con el retroactivo en esta pensiones especiales de Alto Riesgo , máxime en un caso como el presente en el que no se acredita inducción a error ni razones para no tener en cuenta hasta la última cotización realizada

5.3. LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN

De conformidad con el **art. 21 de la Ley 100 de 1993** , el IBL en su caso es el de los **últimos 10 años** . El Juez obtuvo un IBL de **\$1.221.035**, pues tuvo en cuenta como **IPC Final 133,40**, cuando debió ser de **88,05**, que genera un **IBL** inferior de **\$1.157.993,05**¹⁷.Y en relación con la tasa, se aplica el **artículo 10 de la Ley 797 de 2003, que una vez** efectuada la operación matemática la Sala define en el **72,16%**, y al aplicarla al IBL de **\$1.157.993,05** se obtiene como mesada inicial la suma de **\$ 870.350,03**, inferior a la definida en la sentencia **(\$900.147)**

Para calcular el retroactivo se tendrá en cuenta **UNA** mesada adicional, porque el derecho se causó con posterioridad al 31 de julio de 2011, y así se definió en la sentencia que se revisa. Y ninguna mesada está afectada por **PRESCRIPCIÓN, porque** la primera mesada corresponde al mes de **octubre de 2016** y la demanda se instauró el **10 de abril de 2018** ¹⁸, dentro del término de los 3 años – **art. 151 del CPTSS y art. 489 del CST**.

El valor del retroactivo pensional entre **1 de octubre de 2016** y el **31 de agosto de 2020** genera un total de **\$ 48.960.157**.

Año	IPC	# mesadas	Valor pensión	Total Retroactivo
2016	5,75%	4	\$ 870.350	\$ 3.481.400
2017	4,09%	13	\$ 920.395	\$ 11.965.137
2018	3,18%	13	\$ 958.039	\$ 12.454.511
2019	3,80%	13	\$ 988.505	\$ 12.850.565
2020		8	\$ 1.026.068	\$ 8.208.544

¹⁷ La Sala aplica el cálculo definida por la **Corte** Suprema de Justicia en sentencias con **Radicado 30602 del 17 de diciembre del 2007 y Radicado 46843 del 25 de marzo de 2015** según el cual, el IPC INICIAL es el de la respectiva anualidad y el IPC FINAL es el consolidado a **diciembre de 2015** porque la pensión se reconoce a partir del **1 de octubre de 2016**

¹⁸ (Fl. 12)

TOTAL	\$ 48.960.157
-------	---------------

COLPENSIONES continuará pagando a partir del **1 de septiembre de 2020**, una mesada pensional por valor de **\$ 1.026.068** con 13 mesadas al año. La entidad descontará del valor del retroactivo a pagar a cada uno de los DEMANDANTES, los aportes en salud, los que de acuerdo con reciente sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, operan por mandato legal, sin necesidad de declaración judicial: **(SL 1169 de 2019 – Rad 64.490 del 10 de abril)**.

6. LA PRETENSION DE INTERESES MORATORIOS

El Juez CONDENÓ a intereses moratorios del **art. 141 de la Ley 100/93** partir del **22 de agosto de 2016** y hasta la fecha de pago efectivo de la obligación y la Sala **comparte** esta decisión.

Sobre la procedencia de estos intereses en caso de retardo en el reconocimiento de la prestación, la Jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema ha sido pacífica y reitera la doctrina referida a que se generan por **el retardo en el pago de las mesadas pensionales**, sin que para ello resulte menester evaluar las circunstancias por las que el derecho pensional se encontraba en discusión o el actuar de las entidades encargadas del reconocimiento y pago del derecho pensional. **SL2941-2016 –**.

Y si bien se ha consolidado un precedente referido a unos casos precisos y excepcionales en los que no resulta procedente la condena a estos intereses, éste se circunscribe a aquellos eventos la administradora de pensiones negó el derecho con apego minucioso a la ley vigente aplicable al caso concreto o cuando el reconocimiento de la prestación en el marco del proceso obedeció a un cambio de criterio jurisprudencial que dicha entidad no podía prever.

Pues bien, en criterio de la Sala en este caso resulta procedente la CONDENA a intereses, porque para la fecha de la **solicitud** el señor VILLA CARDONA tenía **causado el derecho a la pensión especial de vejez**, como se expuso en precedencia. Adicionalmente, la Sala observa que COLPENSIONES actuó de manera pasiva y negligente al resolver el derecho pensional del actor, pues para determinar si las actividades ejecutadas por el señor RAÚL ANTONIO eran o no de las catalogadas como de ALTO RIESGO únicamente intentó en una ocasión requerir a los empleadores **CARBONIA S.A. e INDUSTRIAL HULLERA S.A.** tal y como se aseveró en los actos administrativos que resolvieron la solicitud

pensional y los recursos del actor, así como se probó con las comunicaciones aportadas por la entidad y que están contenidas en el expediente administrativo¹⁹

En la respuesta a la demanda COLPENSIONES alega que los intereses moratorios no proceden cuando la entidad no reconoce la prestación con **plena justificación** porque tiene un respaldo normativo o porque proviene de una aplicación minuciosa de la ley sin los alcances que le puedan dar a la misma los jueces en su función de interpretarlas, para lo que invocó jurisprudencia de la Sala Laboral de la CSJ, pero en el caso concreto la Sala no advierte ninguna de estas situaciones.

Así, al haberse solicitado la prestación el **21 de abril de 2016** los intereses se causan al día siguiente de cumplirse los **4 meses**, es decir, el **22 de agosto de 2016**, como lo concluyó el A quo.

7. COSTAS

Al analizarse la providencia en virtud del grado jurisdiccional de consulta, no se causan costas en esta instancia.

8. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, La Sala Sexta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por EL JUEZ QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, pero se **MODIFICAN**:

El **NUMERAL SEGUNDO** únicamente en el sentido en el que el señor RAÚL ANTONIO VILLA CARDONA tiene derecho a que COLPENSIONES reconozca y pague la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo desde el **1 de octubre de 2016** y en una cuantía de **\$ 870.350** para esa anualidad.

El **NUMERAL TERCERO** únicamente en el sentido de que el retroactivo causado entre **el 1 de octubre de 2016 y el 31 de agosto de 2020**, calculado con **13 mesadas anuales**, asciende a la suma de **CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO**

¹⁹ (Fls. 104-107; 172)

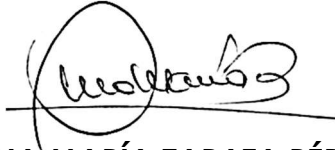
CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$ 48.960.157) e igualmente, que a partir del **1 de septiembre de 2020** el valor de la mesada será de **\$ 1.026.068**.

SEGUNDO: Sin COSTAS en esta instancia.

Se termina la audiencia y en constancia se firma por quienes intervinieron.

LOS MAGISTRADOS

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

CERTIFICO:

Que la presente providencia fue notificada por **ESTADOS N° 105** fijado en la página web de la Rama Judicial el día de hoy.

Medellín, 5 de agosto de 2020

Secretario